

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias. Pedro Ogazon. Juan J. de la Garza. José M. Lozano. José Arteaga. P. Ordaz. M. de Castañeda y Nájera. José M. del Castillo Velasco. M. Auza. Simon Guzman. L. Velasquez. M. Zavala. José García Ramírez. Ignacio M. Altamirano. Luis Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, 17 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Martin Banda y Secundino Arteaga, contra los procedimientos del Gefe político de Celaya, que los juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo contra salteadores y plagiarios, condenándolos á muerte con infruccion de los artículos 13 y 20 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: en 4 de Marzo último, Secundino Arteaga y Martin Banda interpusieron el recurso de amparo, contra los procedimientos de la Gefatura política de Celaya, que condenándolos como salteadores los juzgó segun la ley de 18 de Mayo de 1871, y los condenó á la pena de muerte, de la cual fueron indultados por el Congreso del Estado, quedando conmutada

TOMO V.—PARTE II.

en la de prision que actualmente estan sufriendo.

Fundan su queja en las garantías individuales consignadas en el artículo 20 de la Constitucion, federal que en su concepto se han violado en sus personas, y niegan la competencia de la Gefatura política de Celaya para juzgarlos y sentenciarlos, por no haber resultado probado otro hecho en la causa que se les formó, que la posesion de algunos objetos robados, cuya legítima adquisicion no les fué posible justificar.

La autoridad ejecutora del acto reclamado, al rendir el informe de que habla el artículo 90 de la ley de 20 de Enero de 1869, manifestó: que los quejosos no gozaban de las garantías que habian invocado, por que eran reos del delito de robo con asalto segun las pruebas del acta que habian instruido, comprendidos en consecuencia en la ley de 18 de Mayo de 1871, que en su artículo 1º entre otras garantías individuales, suspendió las concedidas en el artículo 20 de la Constitucion para los salteadores y plagiarios; y como á este informe no se acompañó ningun justificante, fué necesario recibir el juicio á prueba, y pasado este término, por equidad se pidió la causa instruida por la Gefatura política de Celaya contra los quejosos, que en testimonio obra en estas actuaciones, como tambien el parecer del C. Fiscal 2º del Supremo Tribunal del Estado, sobre peticion de indulto hecha por Secundino Arteaga y Martin Banda.

Para resolver en el presente caso, si debe concederse el amparo que se solicita, es necesario examinar si los quejosos estan comprendidos en la ley de suspension de garantías que se ha citado, por haber resultado en el acta que se instruyó contra ellos, pruebas bastantes de ser ellos los autores del robo con asalto que se les atribuye. La ley de 18 de Mayo de 1861, supone para su aplicacion la prueba jurídica de la existencia del delito y de la delincuencia del procesado: sobre este punto el Promotor fiscal que suscribe está conforme con la opi-

nion del C. Fiscal del Supremo Tribunal del Estado. Las constancias de la causa que en testimonio obra en estas actuaciones, no prueban que Secundino Arteaga y Martin Banda, sean los autores del robo con asalto que motivó la averiguacion.

Está probado que en 26 de Agosto del año próximo pasado, fueron asaltados, robados y heridos en el camino de Celaya á San Cristóbal, los Ciudadanos Vicente Paredes y Guadalupe Mendoza; y habiendo tenido conocimiento de este hecho la Gefatura política de Celaya, mandó en persecucion de los autores del robo, una fuerza, que dos dias despues aprehendió á los quejosos, á Cristóbal Foussaca y Bibiano Lopez; sujetos á juicio, fueron consignados los dos últimos á la justicia ordinaria, y los primeros sentenciados á muerte. Los datos que resultaron en la causa y que sirvieron de fundamento á la sentencia, fueron: el hallazgo en poder de los reos de algunas de las prendas robadas, cuya procedencia legítima no justificaron, y su mala fama en materia de robo, unida á otros indicios que corroboran estos hechos, pero de los cuales no puede inferirse que los quejosos hayan concurrido al asalto que sufrieron los CC. Paredes y Mendoza, sino que fueron receptadores y no autores del delito, de los cuales habla únicamente la ley de 18 de Mayo de 1871.

En el escrito de queja, aunque solamente especifican como violadas las garantías individuales consignadas en el artículo 20 de la Constitucion federal, con bastante claridad se niega la competencia en este caso de la jurisdiccion privativa de la Gefatura política de Celaya, cuya falta de jurisdiccion importa la violacion del artículo 13 de la misma Constitucion.

Por las razones expuestas, el Promotor fiscal fundado en que en las personas de los quejosos se han violado las garantías consignadas en los artículos 13 y 22 de nuestra Carta fundamental, pide: que el Juzgado se sirva concederles el amparo de la Jus-

ticia de la Union que solicitan. Guanajuato, Abril 7 de 1873.—*José Aguilar y Córdova.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, 25 de Abril de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Martin Banda y Secundino Arteaga, contra el proceso que les instruyó el C. Gefepolítico de Celaya, condenándolos á la pena de muerte como autores del robo con asalto que sufrieron lo CC. Antonio Servin, Vicente Paredes y José Guadalupe Mendoza el 26 de Julio de 1873, en la Estancia de la Labor, jurisdiccion de aquel Departamento, alegando los quejosos que se han violado en sus personas las garantías que otorga el artículo 20 de la Constitucion y la que les asegura el derecho de ser juzgados por sus jueces naturales, apareciendo: que los promoventes fueron procesados con arreglo á la ley de 18 de Mayo de 1871, la cual es privativa para juzgar á los salteadores y plagiarios, para quienes exclusivamente suspende el goce de algunos de los derechos del hombre, sancionados en la Seccion 13 del Pacto federal; apareciendo que en el proceso no se probó legalmente que los nominados Banda y Arteaga hayan concurrido al asalto y robo que se les atribuye, supuesto que los robados no conocieron á sus agresores, ni hubo testigos presenciales del crimen y la sentencia se funda únicamente en la presuncion que resulta contra los quejosos, por el hecho de haberse hallado en su poder algunos de los objetos robados y por la mala fama que varios testigos les imputan.

Considerando: que mientras no conste con pruebas jurídicas incontestables, que los quejosos son plagiarios ó salteadores, ellos disfrutan de todas las garantías individuales que consigna la Constitucion.

Considerando: que en el proceso que se les formó, no se guardaron los preceptos del

artículo 20 de dicho Código, por que no se les cargó con los testigos que depusieron en su contra, ni se les facilitaron los datos necesarios para probar sus descargos, ni se les oyó en defensa por sí mismos, ni por persona de su confianza.

Considerando: que la autoridad que procedió contra ellos no es su juez natural y ordinario, sino un Tribunal especial, establecido con el esclusivo objeto de juzgar á los salteadores y plagiarios, y por lo mismo, al proceder criminalmente contra los quejosos, violó en perjuicio de estos la garantía á que se refiere el artículo 13 de la Constitución, y de la cual no están privados, por que no se ha justificado que sean de los delinquentes de que habla la ley de 18 de Mayo de 1871.

Por tales consideraciones y con apóyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Union, ampara y protege á Martín Banda y Secundino Arteaga, contra los procedimientos del C. Gefe Político del Departamento de Celaya, en virtud de los cuales fueron aquellos procesados y sentenciados á muerte, como salteadores, con violacion del artículo 13, y fracciones 3ª, 4ª, y 5ª del 20 de la Constitución Federal. Notifíquese este fallo á las partes, publíquese en el Periódico Oficial, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales. El C. Juez de Distrito así lo decretó y firmó. Doy fé.—*Alvino Torrez.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 2 de Mayo de 1873.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 4 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Martín Banda y Secundino Arteaga, contra los pro-

cedimientos del Gefe político de Celaya, que los juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871 contra salteadores y plagiarios, por considerárlos autores de un robo que tuvo lugar el 26 de Agosto de 1861 en el camino que conduce de Celaya para la hacienda de San Cristóbal; y los condenó á muerte aplicándoles la misma ley, violandose con tales procedimientos, en concepto de los quejosos, las garantías que otorgan los artículos 13 y 20 de la Constitución federal.

Considerando: que por las constancias de la causa instruida á Banda y Arteaga y que obra en este ocurno, no aparece hasta ahora plenamente probado que ellos fueron realmente los autores del robo de que se les hizo cargo.

Que no se les oyó en defensa por sí, ni por persona de su confianza, segun lo previene la misma ley de 18 de Mayo citada.

Que por estos motivos aparece, que efectivamente hubo violacion de las garantías constitucionales que han invocado los quejosos al solicitar el amparo federal.

Con fundamento del artículo 101 de la Constitución de la República, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato en 25 de Abril del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Martín Banda y Secundino Arteaga, contra los procedimientos del Gefe político de Celaya, por los que los juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo contra salteadores y plagiarios, condenándoles á muerte con infraccion de los artículos 13 y 20 de la Constitución federal.

Devuélvanso los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Jose María Iglesias.*

—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 27 de 1873.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Guanajuato por Secundino Mena, contra el Gefe político del partido de Salamanca, por haberlo juzgado y condenado á muerte conforme á las leyes de 18 de Mayo de 1871, contra salteadores y plagiarios.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por Secundino Mena, contra la Gefatura política de Salamanca, por violacion de garantías individuales, dice: que al notificársele al quejoso que el presente juicio se recibia á prueba, manifestó que no tenia ninguna que rendir, suplicando al juzgado se recabara el testimonio de la causa que se le habia instruido, cuyo testimonio habia sido remitido por el C. Gefe político de Salamanca, al rendir el informe de que habla el artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869. El juzgado en auto de 19 del presente, mandó cerrar el término de la dilacion probatoria, en atención á que tanto el quejoso como la parte fiscal, habian manifestado que no tenian ninguna otra prueba que rendir.

El que suscribo, al evacuar el traslado prevenido en el artículo antes citado, considerando bastantes los datos que entonces

existian para resolver el presente recurso, manifestó su opinion, fundándola en las constancias de la causa, que como se ha dicho, remitió el Gefe político de Salamanca.

Por este motivo el Promotor fiscal, reproduciendo su pedimento de fecha 9 del presente, suplica al juzgado se sirva conceder el amparo de la Justicia de la Union que solicita Secundino Mena.

Guanajuato, Junio 30 de 1873.—José Aguilar y Córdova.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

El C. Albino Torrez, Juez de Distrito de este Estado, á V. C. Juez de letras de Salamanca, hago saber: que en el juicio de amparo promovido por el reo Secundino Mena, se ha pronunciado la sentencia que á la letra dice:—Guanajuato, 11 de Julio de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Secundino Mena, contra el proceso que le instruyó el Gefe del Partido de Salamanca, C. Porfirio Sanchez, condenándolo á muerte como ladrón en gaviilla, y violando, en concepto del quejoso, las garantías que proclaman los artículos 13, 14 y fracciones 3ª, 4ª y 5ª del 20 de la Constitucion federal; resultando que en 26 de Abril de 1871, fué aprehendido el promovente y sometido á un juicio criminal que inició el alcalde único popular de Pueblo Nuevo, y continuó y terminó la espressa autoridad política de Salamanca, con motivo de haber sido perseguida una gaviilla que se dice haberse presentado ese mismo dia en el rancho de los Duranes, y á la cual se asegura haber pertenecido el peticionario; resultando que durante la sustanciacion de dicho juicio seguido con arreglo á la ley general de 18 de Mayo de 1871, se intentó probar con el testimonio de tres testigos, que el procesado habia concurrido á la funcion de armas que tuvo lugar el 27 de Febrero del citado año, entre una pequeña fuerza de seguridad pública de Sala-